

Violencia y política electoral en Chihuahua

Carmen Silvia Zepeda Bustos*

La evolución del narcotráfico no es responsabilidad de ningún partido político. Aun la alternancia –como en el caso de Chihuahua– fue incapaz de ofrecer respuestas a un fenómeno que a los gobiernos de distintos tintes políticos les ha resultado incontrolable, pero también ante el cual han sido omisos. Baste mencionar que durante el gobierno de Francisco Barrio Terrazas, se desata la ola de violencia feminicida en Ciudad Juárez. De 1992 a 1998 existieron por lo menos 125 casos de homicidios contra mujeres, sin contar los casos de secuestros y desapariciones.

Han pasado casi 63 años, desde que Luis H. Álvarez fuera postulado como candidato del PAN a la Presidencia de la República (noviembre, 1957); y 51 años de que el PAN ganara por primera vez una presidencia municipal en Chihuahua (Ascensión, en 1959). Para después obtener su segunda alcaldía en 1974 (Ojinaga), y los principales municipios del estado (1983), con Luis H. Álvarez como candidato a Chihuahua capital y Francisco Barrio Terrazas en Ciudad Juárez. Triunfos replicados en Durango capital y en la ciudad de San Luis Potosí.

El recuento de la historia del PAN en el norte del país no puede entenderse sin la referencia a los movimientos de protesta civil. En

1985, en Sonora, con Adalberto Rosas López (El Pelón), que encabezó la protesta poselectoral luego del fraude por el cual le fue arrebatada la gubernatura.

Y en ese mismo año, debido a las elecciones federales, ocurrieron protestas en algunos otros estados del norte del país como Nuevo León (Monterrey), Sonora (Agua Prieta y Naco). Para un año después, ampliar la protesta a Chihuahua, que encabezada por Luis H. Álvarez, tuvo el propósito de denunciar el fraude cometido en los comicios para la gubernatura llevando como candidato a Francisco Barrio, integrándose incluso el Movimiento Democrático Electoral (PAN, PSUM y PRT), apoyado por la jerarquía católica y el empresariado; y a San Luis Potosí con el Frente Cívico. Movilización replicada en Monclova, Coahuila y

en la campaña presidencial de Manuel Clouthier en 1988.

En 1989, con Ernesto Ruffo Appel, el partido obtiene su primera gubernatura, siendo así ésta la primera ocasión en que un partido de oposición atrae el gobierno estatal; en 1992, accede a la segunda con Francisco Barrio en Chihuahua. Un año antes, obtiene la primera senaduría con Héctor Terán Terán por Baja California; y en 1997 a la gubernatura de Nuevo León con Benjamín Clariond.

Estos últimos acontecimientos marcan el surgimiento de una imagen del norte del país como tierra de cambio electoral, de declive priísta y de ascenso del PAN apoyado en una nueva generación de candidatos provenientes de círculos empresariales ajenos al PAN tradicional, capaces de ganar elecciones en ciudades importantes y hasta guber-

* Investigadora independiente.

naturas¹. Percepción cristalizada con el ascenso del PAN a la Presidencia de la República con Vicente Fox.

Crimen organizado y violencia

Pero al lado del progreso electoral del panismo, evolucionó la violencia derivada de otro fenómeno de notable raigambre en la región: el narcotráfico, con todo su impacto y consecuencias para la población.

En la zona confluyen actualmente, al menos cinco cárteles de la droga: Tijuana, Juárez, Sinaloa, del Golfo y Los Zetas, lo que influye por sí mismo en los niveles de violencia que caracterizan a la región y que además de reflejarse en la alteración de los espacios de convivencia social de la población, adquieren su más cruel expresión en el número de ejecuciones registradas en el norte del país.

Sólo por mencionar un dato, en 2009, las ejecuciones ascendieron a 8 mil 281. Entre los diez estados con el mayor número de estos eventos se encontraron Chihuahua (3,637), Sinaloa (814), Baja California (691), Durango (314) y Sonora (294). Y si bien la cifra fue menor en los casos de Coahuila (98), Nuevo León (71) y Tamaulipas (31)², salvo en el caso de Coahuila, en todos los estados mencionados se mantiene el operativo militar del gobierno federal contra el narcotráfico.

Entre enero y septiembre de 2010, el número de ejecuciones superó en 17% a lo observado en 2009, al incrementarse a 9 mil 747³.

Por mencionar algunos ejemplos, la extorsión y los secuestros se han convertido en la norma, y sectores enteros de la población están bajo presión del crimen organizado poniendo en riesgo ciudades de importancia económica en el país como Monterrey, envuelta cada vez más en el caos.

En Tamaulipas, el cártel del Golfo detenta el control sobre un porcentaje importante de los procesos productivos y los negocios del estado, y ha logrado establecer una vasta red económica en la que se cuentan el cobro de cuotas a empresarios y a la población en general a cambio de protección, y el control y operación de bandas dedi-

cadadas al tráfico de indocumentados. Actividad esta última que, por otro lado, ha adquirido una importante dimensión económica tanto en la frontera norte como en el resto del territorio nacional.

Esto, sin contar los atentados y homicidios cometidos contra miembros de la clase política local de las diferentes entidades de la región, sobre todo contra los presidentes municipales, que en este entorno se convierten en el eslabón más vulnerable de los tres órdenes de gobierno. Hasta septiembre de 2010, habían sido asesinados por el crimen organizado once ediles, entre éstos, municipales de Durango, Tamaulipas y Nuevo León. Recuento en el que se incluye el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, así como la masacre de 72 indocumentados centroamericanos, en un rancho del municipio de San Fernando.

Se suma a este esquema, la existencia de numerosas pandillas, algunas con nexos con organizaciones delictivas de Estados Unidos, como la Mafia Mexicana o la Mara Salvatrucha.

Desapariciones forzadas e involuntarias, de las que dan cuenta fosas clandestinas localizadas en Ciudad Juárez y Chihuahua; en Arteaga, Coahuila, y Santa Catarina, Nuevo León; y Tijuana, Baja California. Víctimas que suman –según informes de la Sedena– 3 mil 160 casos en lo que va del gobierno de Felipe Calderón, cifra no incluida en los fríos números que relacionan las ejecuciones cometidas en la región norte del país. Del total de las desapariciones, mil 167 han sido reportadas en Tijuana, y mil 447 en todo Baja California⁴.

En esta lógica de la violencia se dan los ataques a instalaciones militares, policíacas y de procuración de justicia, así como de medios de comunicación como Televisa Monterrey; los periódicos *El Debate* (Culiacán), *El Siglo de Torreón*, *El Mañana* (Nuevo Laredo), *Cambio* (Hermosillo), entre otros; así como el asesinato y desaparición de periodistas de diferentes medios informativos de la región.

Además del rescate de miembros de grupos criminales en Coahuila, Chihuahua y Nuevo León; a los que se agrega el tráfico y asesinato de migrantes centroamericanos; y la proliferación de otros delitos como el robo de acero y de combustible en los ductos de Pemex, a manos de grupos del narcotráfico.

¹ Beltrán, Ulises y Cruz, Alejandro. *El Norte: ¿relineamiento electoral?* Consultado en línea <<http://www.bgc.com.mx>>.

² *Milenio*, 2 de enero de 2010, Consultado en Línea.

³ *Milenio*, 1° de octubre de 2010. Consultado en Línea.

⁴ Ortega Sánchez, José Antonio. *¿Rumbo al Estado Fallido?. Propuestas para evitar el colapso del país*. Editorial Planeta, México, septiembre de 2010, p. 50.

Sin contar el control de los grupos criminales sobre una parte importante de las policías locales de Nuevo León, Baja California, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Los efectos colaterales son igualmente perniciosos. El incremento de la fuerza policiaca y militar ha colocado a la población en una situación de vulnerabilidad al estar entre dos fuegos: las agresiones del narcotráfico, y la tortura, desapariciones forzadas, muertes y allanamientos atribuidos al Ejército, así como las extorsiones achacadas a elementos de la Policía Federal.

En otros ámbitos, de acuerdo al Índice de Competitividad de las Entidades Federativas Mexicanas (ICE) 2010, dado a conocer por el Colegio de la Frontera Norte en septiembre de 2010, la creciente inseguridad se ha convertido en el principal inhibidor de la competitividad regional, lo que afectó particularmente a Chihuahua, Coahuila, Durango y Sonora. En este ranking, Chihuahua descendió del 4° al 10° lugar.

Más de 2 mil establecimientos de servicios dentales, que participan con 2.1% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, han cerrado debido a la inseguridad. A pesar de que en el resto del país dicho sector reporta una recuperación de 10%, en ciudades como Juárez, Tijuana, Reynosa y Nuevo Laredo, se registran pérdidas de 20%.

En este ambiente, se han desarrollado los procesos electorales de la región, en los últimos 20 años. Periodo en el que el PRI ha mantenido invariablemente los gobiernos de Tamaulipas, Durango y Coahuila. No así Chihuahua y Nuevo León, que estuvieron bajo gobiernos panistas a partir de 1992 y 1997, para ser recuperados en 1998 y 2003, respectivamente.

Ni Baja California ni Sonora, actualmente gobernados por Acción Nacional en virtud de las elecciones de 2007 y 2009; ni Sinaloa, arrebatado al PRI en las elecciones de julio de 2010.

Hablando particularmente de Chihuahua, la operación de los cárteles mexicanos del narcotráfico en la entidad, data de los años 90 cuando los cárteles colombianos de Cali y Medellín se debilitaron. Aunque los grupos vinculados al tráfico de drogas como los cárteles de Juárez, Tijuana y Sinaloa tienen presencia en la capital, Guadalupe y Calvo y Ojinaga, sin duda Ciudad Juárez es escenario de enfrentamientos entre estos distintos grupos desde su asentamiento en la entidad.

Sin embargo, la agudización de la violencia tiene antecedentes mucho más recientes. A partir de 2008, una vez rota la alianza entre los cárteles de Juárez y de Sinaloa,

ambos entran a una etapa de abierta confrontación. En ésta adquiere especial importancia el control de las rutas de trasiego de drogas que cruzan por Chihuahua, pero sobre todo por Ciudad Juárez y El Paso, Texas.

Esta pugna es la que ha marcado el derrotero seguido por la violencia, cuya expresión más visible es el número de ejecuciones registradas diariamente. Este primer indicador, por llamarlo de alguna manera, ha convertido a Ciudad Juárez, la segunda más importante de la frontera entre México y Estados Unidos, en referencia obligada del caos provocado por el crimen organizado en el norte del país, y en punto de comparación con otras experiencias internacionales, expresadas por diferentes fuentes periodísticas e investigadores. Al respecto se dice que:

Ciudad Juárez, tiene un índice de asesinatos 425% mayor que el de Los Ángeles, una ciudad con 12 millones de habitantes (contra 1.5 de Juárez) y azotada por las guerras de las bandas de Estados Unidos.

Según cifras oficiales, poco más de 10 mil personas han sido asesinadas en el estado de Chihuahua —un promedio de 100 por mes— entre noviembre de 2007 y septiembre de 2010, 7 mil 64 de ellas en Ciudad Juárez.

Entre enero y septiembre de 2010, esta cifra se ubica en 2 mil 216 personas en esta ciudad, considerada ya como la más violenta del mundo después de Bagdad.

Durante el 2009 se reportaron 2 mil 754 asesinatos, mientras que en Bagdad fueron mil 545, pese a que la capital de Irak tiene una población cinco veces mayor. En ese mismo año, Afganistán, con una población de 29 millones, reportó 2 mil 412 muertes violentas de civiles y 520 de militares, según la Misión de Asistencia en Afganistán de Naciones Unidas (UNAMA).

También en ese año, en Juárez, se registraron 191 homicidios por cada 100 mil habitantes, seguida de San Pedro Sula, Honduras, con 119, y la capital salvadoreña, San Salvador, con 95. Estas ciudades junto con Caracas representan las más peligrosas de América.

A diferencia de otras ciudades en las que la violencia se concentra en áreas como el barrio de Fabelas en Río de Janeiro, Brasil, o Cité Soleil, en la capital haitiana de Port-au-Prince, la violencia en Ciudad Juárez se extiende por todo su territorio. En abril, la cadena CNN listó a Ciudad Juárez entre las ciudades más peligrosas del mundo junto con Karachi, Pakistán; Beirut, Líbano; y Ciudad del Cabo, en Sudáfrica⁵.

⁵ Arturo Ravela, "Ciudad Juárez. La Más violenta del mundo". 2 de julio de 2010. Consultado en Línea <<http://www.Ponte al Día>>.

Una multiplicidad de eventos forma parte del correlato de violencia que acompaña el desarrollo de la ciudad:

- A la actividad de los cárteles se suma la existencia de cerca de 750 pandillas, con presencia en la capital del estado y en Ciudad Juárez. Muchas de éstas vinculadas con los cárteles de la droga y el crimen organizado, y cuyos integrantes son reclutados inclusive desde los nueve años.
- Específicamente en Ciudad Juárez, pandillas de alta peligrosidad como Los Aztecas y La Línea vinculadas con el Cártel de Juárez; y Los Mexicles y Artistas Asesinos, relacionadas con el Cártel de Sinaloa. Otras bandas (o gangas) son utilizadas como proveedoras de sicarios, cobradores y distribuidores de droga⁶.
- Los Aztecas cuenta con cinco mil elementos, y Los Mexicles con tres mil miembros. Tienen ramificaciones en Los Ángeles y San Diego, California, así como en El Paso, Texas. Además de actuar como sicarios de los cárteles, sus miembros se dedican a asaltar, a la venta de drogas y de armas.
- Es común que las balaceras ocurran en lugares públicos y alcancen de manera indiscriminada a quienes se encuentran en calles, hospitales, negocios, bares, restaurantes y hasta iglesias.
- Los asesinatos son en ocasiones extremadamente violentos y sádicos. Los cuerpos de las víctimas han sido en ocasiones descuartizados, degollados, y esparcidos sobre la calle o colgados de algún puente o monumento en las avenidas principales con mensajes de amenazas a autoridades y cárteles adversarios a través de las llamadas “narcomantas”.
- Desde 2007 y hasta septiembre de 2010, aproximadamente 230 mil personas han huido de Ciudad Juárez, para establecerse en El Paso, Texas, en un área ya conocida como El Juárez Nuevo.
- Un documento del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Ciudad Juárez, precisa que de este éxodo unas 124 mil personas (el 53.9%) se refugiaron en Estados Unidos, principalmente El Paso. El resto

⁶ Treinta bandas son consideradas las más peligrosas: Barrio Azteca, Barrio Bella Vista Park, Florencia 13, 72 Insurgentes, Moras 13, Los 23, Tiburones, Los Mexicles, AA, Harppis, Kakis 90, Bufones, Barrio El Silencio, Los Quintero, Bambú 24, La 68, Fe 2 Chica, Barrio San Juan, Barrio la Brisa, La Quince, Los Olvidados, Oldies 23, Kakis 23, Calaveras, Cobras 23, Locos 23, Riveras, Barrio Azul, CTG y 68 Locos, entre otras. 3 de octubre de 2010. Consultado en Línea <<http://www.NTR Zacatecas>>.

—antes atraídos por el trabajo en las maquiladoras— ha regresado a sus ciudades de origen, principalmente en los estados de Durango, Coahuila y Veracruz. En 2008, cerca de 2 mil 800 obreros y directivos de otros estados de la República abandonaron la ciudad.

- El establecimiento de encumbrados empresarios juarenses que, por miedo al secuestro y cansados de pagar “cuotas” al crimen organizado en Juárez, ha hecho crecer el sector inmobiliario con la compra de grandes residencias, y también la economía, dada la instalación de los negocios de esos migrantes en territorio texano. Ahí, de acuerdo con la Cámara de Comercio Hispano en El Paso, con el establecimiento de los comerciantes de Ciudad Juárez el gremio restauranero ha aumentado un 40% en los últimos tres años.
- La otra cara del desplazamiento poblacional hacia EU, es el abandono de al menos 120 mil casas en Ciudad Juárez.
- El tradicional atractivo de los bares, discotecas y vida nocturna juarense entre jóvenes estadounidenses radicados en la frontera y militares del Fort Bliss de El Paso, Texas, y Las Cruces, Nuevo México, también se extinguió.
- Periodistas y comunicadores se ven precisados a pedir asilo en EU por temor a agresiones a su persona y la de sus familias.
- El robo, el secuestro y la extorsión han hecho inoperantes los negocios de alimentos en Ciudad Juárez; 80% de los comercios pagan extorsión.
- Entre 2008 y agosto de 2010, han sido cerrados 10 mil 670 negocios a causa de la violencia, según cifras de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).
- La Cámara de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), dio a conocer que se han perdido más de 4 mil empleos y alrededor del 40% de los negocios han cerrado.
- El cierre de negocios ha impactado en el incremento del desempleo. Según INEGI, el estado de Chihuahua en su totalidad se ubicó en primer lugar de desempleo en México durante el primer trimestre del 2010. Otras fuentes estiman que el desempleo en Ciudad Juárez ha aumentado de cero al 20% en los últimos dos años, mientras que el promedio en México es de 4.81 según INEGI.
- La extorsión alcanza a empresarios, profesionistas, académicos, ejecutivos de la industria maquiladora, pro-

fesores de primaria y aun trabajadores de instituciones públicas. Los médicos resultan ser uno de los sectores más lastimados por la extorsión, el secuestro y los asesinatos. En 2009, de acuerdo con informes proporcionados por la PGJE, se denunciaron formalmente 100 secuestros.

- Al respecto, la corrupción que imperaba entre policías municipales de Ciudad Juárez trató de resarcirse a partir de 2007, mediante la presencia militar. Durante el primer año de gobierno de Felipe Calderón, fueron enviados 5 mil 500 efectivos, número que aumentó a 6 mil a mediados de 2009.
- La militarización no logró disminuir la violencia o los asesinatos. Por el contrario, al miedo de los ciudadanos, en alerta ante la posibilidad de que en cualquier momento estallara la violencia o alguna balacera justo en donde se pudieran encontrar, o recibieran en su casa una llamada de extorsión o amenaza de secuestro, se sumó el temor a los abusos de las fuerzas armadas.
- De acuerdo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en Chihuahua, desde la llegada de los militares a Ciudad Juárez y hasta marzo de 2009, las detenciones anticonstitucionales, amenazas, casos de tortura y allanamientos ilegales, conformaban una larga lista. Tan sólo las detenciones ilegales sumaban 3 mil; y los allanamientos alrededor de 4 mil⁷.
- El envío de agentes federales (2 mil en enero de 2010), y la toma del mando operativo en Ciudad Juárez, por parte de la Policía Federal en abril de ese mismo año, tras la conclusión del Convenio de Colaboración con el Ejército Mexicano—⁸ no ha significado un mejor resultado. Hay señalamientos de empresarios sobre casos de extorsión dirigida a diferentes sectores sociales, cometidos por militares y agentes federales.
- La inseguridad ha inhibido la inversión, como en la construcción de clínicas de alto nivel para pacientes estadounidenses que quieren evitar los altos costos de la salud en EE.UU.

⁷ *La Jornada*. México, 6 de marzo, 2009. Consultado en línea.

⁸ Para la atención de la zona urbana de Ciudad Juárez, la Policía Federal cuenta con 5 mil elementos. Bajo este nuevo esquema los militares tendrían el control de la zona rural y comunidades ubicadas en el Valle de Juárez; vigilarían los cruces internacionales hacia Estados Unidos, aeropuertos y terminales de transporte terrestre, además de establecer puestos de control en las entradas a la ciudad. *El Universal*. México, 9 de abril de 2010. Consultado en línea.

- Los feminicidios, que suman 475 entre 1993 y junio de 2010, son una problemática arraigada, ahora sujeta a un proceso de invisibilización social y política según el punto de vista de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, desde el inicio de la ola de creciente violencia por parte del crimen organizado.
- Otros hechos recientes, retratan la realidad en Juárez: los atentados del crimen organizado contra jóvenes, como sucedió en una fiesta en Villas de Salvárcar y en un centro de rehabilitación para drogadictos, el estallido de un coche-bomba y la ejecución de tres personas ligadas al consulado de Estados Unidos.

Una de las respuestas oficiales a esta situación, fue el Programa Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad, instrumentado en febrero de 2010, en medio de la crisis de seguridad desatada con la masacre cometida por presuntos sicarios contra 15 jóvenes en una fiesta en Villas de Salvárcar.

Este Programa contempló acciones de infraestructura, salud, educación y deporte, así como en rubros de cobertura médica, becas educativas, construcción de escuelas y aulas. Abelardo Escobar, secretario de Reforma Agraria, fue designado como responsable de los trabajos del programa, quien sería auxiliado por Luis H. Álvarez, y el jefe de asesores de la Presidencia de la República, Antonio Vivanco Casamadrid.

Se contaría inicialmente con una inversión de 630 millones de pesos, con la idea de conjuntar la bolsa total que sumaría 270 millones de pesos para la ampliación de la cobertura de salud; 40 millones para programas de atención a adictos a las drogas, y construcción de centros de atención primaria y bachilleratos, entre otras acciones relacionadas con la infraestructura educativa. Así como un mayor despliegue de policías, revisión de giros negros, combate a secuestros, extorsiones y cobro de piso, así como al narcomenudeo.

Con base en el esquema propuesto, la PGR auxiliaría en la intervención de comunicaciones privadas en delitos graves, y con la información de los concesionarios de red pública de telecomunicaciones, en la georreferenciación telefónica para la identificación inmediata en el tema de extorsión y de secuestro, se ofrecerían recompensas para perseguir más eficazmente a los delincuentes, y se desarrollarían operaciones encubiertas en materia de narcomenudeo.

La SSP-Federal presentó el Plan de Operaciones Ciudad Juárez que consistiría en un nuevo esquema de despliegue territorial con incremento de policías para revisión de vehículos sin placas, vehículos sin permiso de circulación y vehículos incluso polarizados; y en creación de corredores seguros. Habría las 24 horas del día agentes de la Policía Federal en las principales vías de Ciudad Juárez, para proveer rutas de movilidad segura en toda la comunidad. La SSP incrementaría de 400 a 2 mil 200 el número de elementos de esa corporación⁹.

A pesar de que según información oficial, a los 200 días del inicio del programa se habían cumplido 100 de las 160 acciones comprometidas, lo cierto es que el número de ejecuciones no reflejó el impacto de éstas¹⁰ sobre solamente uno de los indicadores de la violencia, sin contar con otras expresiones.

El impacto político de la violencia del crimen organizado

No es posible conocer con exactitud si este contexto, que se replica con variantes en los estados del norte del país, es el que ha incidido en los niveles de abstencionismo y en los resultados de los procesos electorales recientes.

Lo que sí es cierto es que el abstencionismo ha sido el rasgo distintivo de los comicios en la región. En 2005,

43.0 en Sinaloa. Pero su más alto nivel es observado en las elecciones para presidencias municipales en Baja California (66.9%).

Tendencia que no es nueva, salvo en momentos en que el abstencionismo se ha ubicado en poco menos de 40%; y que ahora es abonada por el clima de violencia que permea esta zona del país (véase Cuadro 1).

Específicamente en el caso de Chihuahua, previo a la jornada electoral, se pensaba que la violencia sería un componente del abstencionismo, agravado por el éxodo de ciudadanos empadronados a El Paso, Texas.

Aún así, el PRI ganó en Chihuahua. El priísta César Duarte obtuvo el 54.6% de la votación total, dejando al panista Carlos Borruel Baquera muy atrás con 39.9%, ante un PRD casi sin presencia que apenas alcanzó el 2%. Esto, además de haber arrasado el PRI en la elección de las presidencias municipales y diputaciones locales, ante un PRD totalmente inexistente en el Congreso local (véase Cuadro 2); y de haber retenido, por tercera ocasión, el gobierno de Ciudad Juárez, mismo que entre 1992 y 2001 se mantuvo ininterrumpidamente bajo gobiernos panistas, en el periodo de desarrollo del narcotráfico en la entidad. (véase Cuadro 3)

Parte de la explicación del triunfo priísta, puede derivarse de un análisis realizado por la consultoría BGC. Ahí los autores, Ulises Beltrán y Alejandro Cruz, fundador y asociado de esa empresa, distinguen 1988 como el punto

Cuadro 1
Abstencionismo en la Región Norte del país

Entidad	1979	1980	1981	1983	1985	1986	1987	1989	1991	1992	1993	1995	1997	1998	1999	2001	2003	2004	2005	2007	2009	2010	
B. California				45.1				52.2				38.7				63.4				59.4			
Chihuahua		63.7				51.2				37.8				43.1				55.8					64.0
Coahuila			68.0								37.1				50.7				47.4				
Durango		52.2				62.2				N.D.				44.7				49.6					46.1
Nuevo León	42.4				42.2		61.5		39.4				37.5				45.6					45.4	
Sinaloa		N.D.				N.D.				42.3				43.7				48.2					42.9
Sonora	67.6				51.5				36.8				39.7				46.9					51.5	
Tamaulipas		N.D.				N.D.				42.3				43.7				48.2					60.2

Fuente: Instituto de Mercadotecnia y Opinión (IMO). Sistema Electoral Mexicano del IMO (SIEM). Página Web. Instituto y Consejos Estatales Electorales N.D. Dato no Disponible.

en Coahuila alcanzó el 47.4%; en 2009 en Sonora y Nuevo León, 51.5 y 45.4 respectivamente. En 2010 se ubicó en 64.0 en Chihuahua; 60.2 en Tamaulipas; 46.2 en Durango; y

de inicio del ascenso electoral del PAN, y 1994 como el momento en que la crisis económica provoca la caída del PRI a niveles no experimentados, salvo en aquellas entidades donde ya había perdido los gobiernos estatales o había estado a punto de hacerlo (Baja California, Chihuahua, Baja California Sur).

⁹ *La Jornada*. México, 16 y 18 de febrero de 2010. Consultado en Línea.

¹⁰ <<http://www.Larednoticias.com.mx>>, 7 de septiembre de 2010, Consultado en Línea.

Cuadro 2			
Chihuahua/Resultados electorales 2010			
Cargos electos	PAN	PRI	PRD
Gubernatura	39.9	54.6	2.0%
Presidencias Municipales	23	41	3
Diputados locales	2	20	

Fuente: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Elecciones locales 2010. Análisis de Informes (PREP). p. 3.

Cuadro 3	
Ciudad Juárez	
Proceso electoral	Partido gobernante
1980	PRI
1983	PAN
1986	PRI
1989	PRI
1992	PAN
1995	PAN
1998	PAN
2001	PAN
2004	PRI
2007	PRI
2010	PRI

Fuente: Instituto de Mercadotecnia y Opinión (IMO). Sistema Electoral Mexicano del IMO (SIEM). Página Web.

Para los autores, dos mitos marcan la historia electoral del norte: el del realineamiento original a favor del PAN en 1983 y el del realineamiento favorable al PRI del 2004. “El PRI no está sacando al PAN del Norte, simplemente el blanquiazul se ha quedado estancado, sólo avivado coyunturalmente por alguna candidatura carismática”.

Asimismo, la experiencia de gobiernos panistas en zonas urbanas importantes de la región y el poco entusiasmo popular que ha dejado tras de sí la promesa de cambio no cumplida por Acción Nacional, explican en cierta medida el ascenso electoral del PRI que, por otro lado, a diferencia del PAN ha conservado su voto duro en la región¹¹.

Explicación que podría ser aplicada a otras entidades donde el PRI logró triunfos importantes como en Tamaulipas, Durango y Baja California. En los dos primeros, reteniendo el gobierno estatal, con predominio visible en el Congreso local y en las presidencias municipales. (véase Cuadro 4)

¹¹ Beltrán, Ulises y Cruz, Alejandro. *El Norte: ¿realineamiento electoral?* Consultado en Línea, <<http://www.bgc.com.mx>>.

Cuadro 4			
Resultados electorales del PRI, julio 2010			
Tamaulipas, Durango y Baja California			
Cargos electos	Tamaulipas	Durango	Baja California
Gubernatura (% de la votación)	61.5	46.5	Elecciones intermedias
Presidencias Municipales	33 de 41	21 de 39	5 de 5
Diputaciones locales	22 de 22	13 de 17	13 de 16

Fuente: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Elecciones Locales 2010. Análisis de Informes (PREP), pp. 3 y 4.

En Baja California, el triunfo fue contundente, logrando revertir la tendencia que se había mantenido favorable para el PAN hasta las elecciones de 2007, cuando también estuvo en juego la gubernatura. Sobresale el hecho de haber recuperado Tijuana –paradigmática también en el tema de la violencia fronteriza–¹², después de casi 20 años de gobiernos panistas (véase Cuadro 5).

Cuadro 5			
Presencia del PRI en Baja California			
Proceso Electoral	Partido gobernante en Tijuana	Distribución de municipios por partido	Distribución de diputaciones locales por partido
1980	PRI	4 PRI	N.D.
1983	PAN	3 PRI, 1 PST	N.D.
1986	PRI	3 PRI, 1 PAN	N.D.
1989	PRI	2 PRI, 2 PAN	N.D.
1992	PAN	1 PRI, 3 PAN	N.D.
1995	PAN	2 PRI, 3 PAN	N.D.
1998	PAN	2 PRI, 3 PAN	11 PAN, 5 PRI
2001	PAN	1 PRI, 4 PAN	13 PAN, 3 PRI
2004	PRI	3 PRI, 2 PAN	11 PAN, 5 PRI
2007	PRI	1 PRI, 4 PAN	14 PAN, 2 PRI
2010	PRI	5 PRI	13 PRI, 3 PAN

Fuente: Instituto de Mercadotecnia y Opinión (IMO). Sistema Electoral Mexicano del IMO (SIEM). Página Web.

N.D. Dato No Disponible.

¹² Alberto Capella, ex presidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública, advierte que en los próximos meses podría enfrentarse en Tijuana un calentamiento similar al de Ciudad Juárez. Hay indicios –como decomisos de armas de alto poder, en algunas comunidades de Baja California– de que Joaquín Guzmán Loera (El Chapo), parece decidido a tomar el control del estado cuando termine su confrontación en Chihuahua. Ricardo Ravel, “Tijuana: La guerra ya regresó” en *Proceso* núm. 1770, México, 2 de octubre de 2010, pp. 14-19.

A manera de conclusión

La evolución del narcotráfico no es responsabilidad de ningún partido político. Aún la alternancia —como en el caso de Chihuahua— fue incapaz de ofrecer respuestas a un fenómeno que a los gobiernos de distintos tintes políticos, les ha resultado incontrolable, pero también ante el cual han sido omisos.

Baste mencionar que durante el gobierno de Francisco Barrio Terrazas, se desata la ola de violencia feminicida en Ciudad Juárez. De 1992 a 1998 existieron por lo menos 125 casos de homicidios contra mujeres, sin contar los casos de secuestros y desapariciones.

Lo que es más, de acuerdo a un artículo publicado en 2004, en el sitio *Nosotras en Red*, los presuntos nexos de Francisco Barrio Terrazas con el narcotráfico, se encuentran documentados. En octubre de 2000, Diana Washington, reportera de *El Paso Times*, divulgó que en las actas del llamado “maxiproceso” contra el Cártel de Juárez de la PGR, el exgobernador aparece como protector del narcotráfico a cambio de fuertes cantidades de dinero. Según esta versión, recibió pagos de Amado Carrillo Fuentes a cambio de protección a sus actividades ilícitas.

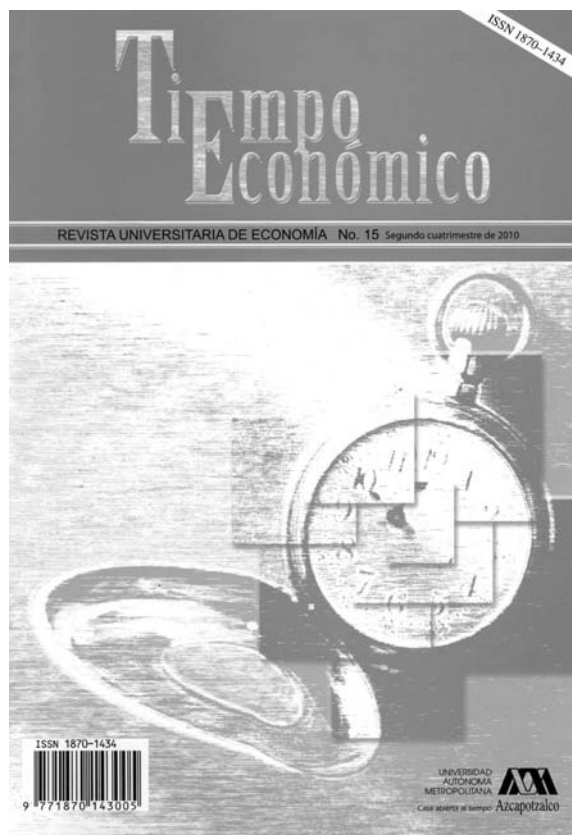
Por las mismas fechas, la prensa divulgó que la Contaduría General del Congreso de Chihuahua había detectado irregularidades que ascendían a más de 25 millones de pesos, en la cuenta pública del organismo descentralizado llamado Promotora de la Industria Chihuahuense, en las que estaba implicado el ex gobernador. A pesar de estas declaraciones, Vicente Fox y su vocera —que luego sería su esposa— Martha Sahagún defendieron la trayectoria de Barrio Terrazas¹³.

A Barrio le sucedió el priísta Patricio Martínez, quien también evadió la responsabilidad que le correspondía en la investigación sobre los feminicidios, argumentando que la violencia y el narcotráfico eran culpa del gobierno de Barrio. José Reyes Baeza continuó con esta dinámica.

No obstante las omisiones y aún la indiferencia de los gobiernos estatales en Chihuahua, y en Ciudad Juárez —recuérdese que ante la situación de inseguridad, José Reyes Ferriz, alcalde de esa plaza entre 2007 y 2010, cambió su residencia a El Paso, Texas—, lo cierto es que a juzgar por los resultados, la población no responsabiliza a las autoridades locales de la extrema violencia.

Esto, a pesar de que José Reyes Baeza, el gobernador saliente, llegó en medio de grandes expectativas, ya que antes de asumir el gobierno estatal fue alcalde de la capital

¹³ Anel Hernández Sotelo, “Feminicidios en Ciudad Juárez: libre comercio, narcotráfico y sexismo”. CONACYT-Universidad Carlos III de Madrid, 20004. Consultado en Internet en <<http://www.Nosotras en Red>>.



y diputado federal, para cerrar su administración como una de las más cuestionadas en la historia.

Si bien le tocó enfrentar una violencia extrema, no supo detener el crecimiento y expansión de la delincuencia en la entidad y se limitó a responsabilizar al gobierno federal, eludiendo el papel que le correspondía como gobernante. Sin mencionar, los señalamientos de protección al Cártel de Juárez, de que es objeto; y la imagen sumamente desgastada con la que finaliza su gestión.

Héctor Murguía, conocido como el Teto Murguía, gana la presidencia municipal de Ciudad Juárez para el periodo 2010-2013, aunque en su pasada gestión como alcalde de esa misma plaza (2004-2007), se le haya acusado de proteger al mismo grupo delictivo. De acuerdo a un artículo publicado por la revista *Proceso*, el brazo armado del Cártel de Juárez, La Línea, logró controlar a la policía local hasta el punto de que en 2008, Saulo Reyes, el secretario de Seguridad Pública de Murguía, fue detenido en El Paso por vínculos con el narcotráfico¹⁴.

Con todo y lo anterior, el PRI arrasó en las urnas en las elecciones de julio pasado. De ahí que resulte inexplicable el comportamiento del electorado, lo que tendría que ser objeto de otra investigación sobre el tema.

¹⁴ Patricia Dávila, “La impunidad, obra de Reyes Baeza” en *Proceso* núm. 1771, México, 10 de octubre de 2010. pp. 20-22.